



1989 - 1995

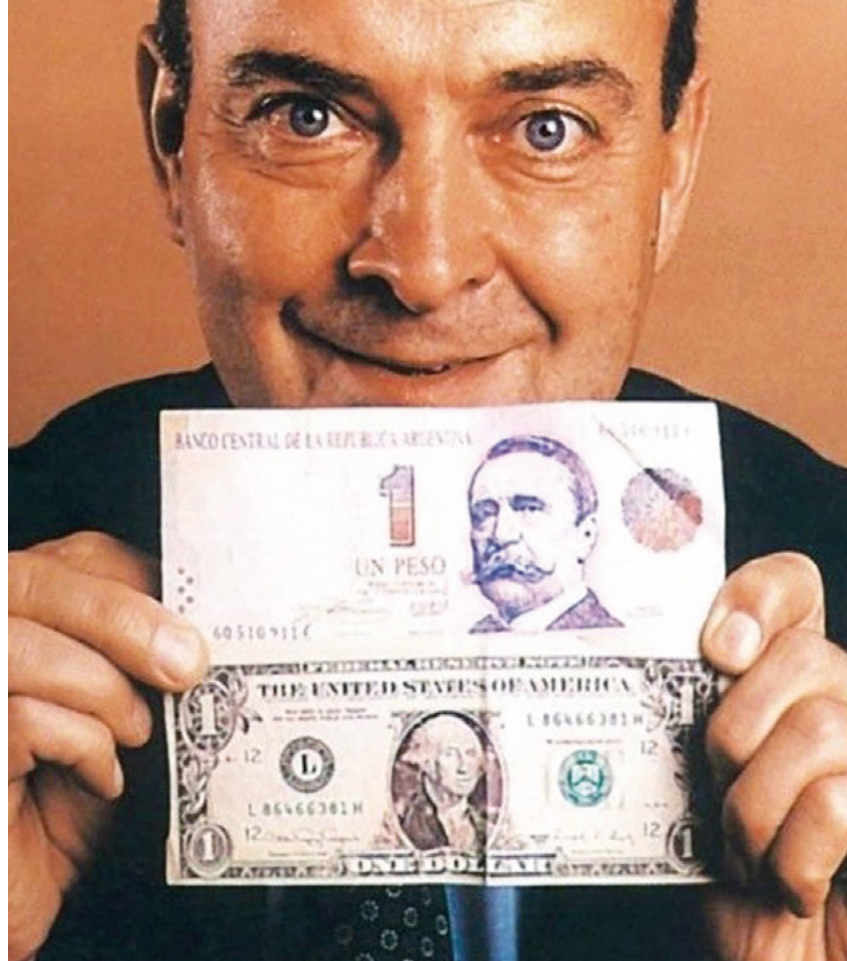
**Los años de la
convertibilidad**



El año 1989 fue un año de crisis. En un escenario convulsionado, con una hiperinflación descontrolada, el presidente Raúl Alfonsín decidió entregar el poder seis meses antes. Así, el peronismo volvía al gobierno de la mano de Carlos Menem. En campaña, Menem reivindicó las bases del peronismo: intervención del Estado en la economía, redistribución y política social. Prometió una “revolución productiva” con la implementación de un “salariazó”. Pero desde el primer minuto se entendió que ese peronismo venía de la mano del liberalismo. Lo primero que hizo fue aliarse con uno de los grupos empresarios más importantes del país, Bunge & Born, y formó una alianza política con Álvaro Alsogaray, el líder político de la derecha argentina. Pero sin dudas, después de varios picos inflacionarios y la confiscación de los plazos fijos a través del llamado Plan Bonex, el gobierno arrancó a funcionar recién en febrero de 1991 cuando designó como ministro de Economía al entonces canciller, Domingo Felipe Cavallo. Esta nueva gestión empezó en un contexto internacional signado por el ocaso del estado de bienestar. En distintos países del mundo se impusieron reformas tendientes a disminuir la injerencia del Estado en la economía, guiadas por la corriente neoliberal expresada en el Consenso de Washington. Al mismo tiempo, cayeron las barreras del comercio entre países y se acentuó el proceso de globalización, que hizo a las economías más interconectadas e interdependientes.

En materia política, si bien durante la campaña electoral Menem tuvo relaciones con el sector de las Fuerzas Armadas conocido como “los carapintadas”, apenas asumió concretó una alianza con los sectores liberales que habían llevado adelante la política económica durante la dictadura militar, y decretó un indulto que benefició a unos 200 genocidas pero que también incluyó al ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Esta medida dejó sin castigo a los autores de crímenes de lesa humanidad, pero logró subordinar a los militares, lo que quedó demostrado con el último alzamiento de los carapintadas en diciembre de 1990: esta vez las mismas Fuerzas Armadas reprimieron a los amotinados. El círculo rojo se alineaba a su política.

En abril de 1991 se implementó el llamado Plan de Convertibilidad (un nuevo régimen cambiario que fija una paridad entre el peso y el dólar) y con el “uno a uno”, la inflación se redujo drásticamente. Para sostenerlo sin endeudarse en dólares, el gobierno recurrió a un severo plan de privatizaciones. Empezó por el espectro radioeléctrico y los canales de televisión para continuar con la empresa telefónica Entel, Gas del Estado, la eléctrica Segba, Ferrocarriles, Somisa y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), entre tantas otras. “Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” fue el fallido del entonces



Después de casi dos años de fuerte volatilidad, la llegada como ministro de Economía de Domingo Cavallo trajo el 1 a 1 y una estabilidad frente a la inflación.

ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. Con esos ingresos se sostuvo la convertibilidad en los primeros años. Y para sostener muchos de esos negociados, se implementó un andamiaje jurídico que se conoció como la Ley Dromi. Otro medida a nivel internacional, que iba en consecuencia con la política económica, fue el alineamiento absoluto a los Estados Unidos, a través de las llamadas “relaciones carnales”, impulsadas por el canciller Guido Di Tella. Pero la consecuencia de la “apertura económica” produjo una profunda descomposición de la industria local. Los fabricantes se convirtieron en importadores dejando un tendal de desocupados en las calles. El sector de servicios pasó a imponerse a la industria rápidamente. También se implementó la delegación a los estados provinciales de una serie de servicios como la salud y la educación y la desregulación del comercio exterior, del mercado de trabajo y del mercado financiero.

“El sistema bancario en general y el Banco de la Nación Argentina en particular tuvieron que iniciar una profunda transformación estructural a fin de reducir sus costos operativos. Este imperativo fue una consecuencia de la drástica caída de las tasas de interés y del spread bancario inducidos por la aplicación del plan de estabilización”, señaló la Memoria de 1991. Entre otras medidas de reducción de gasto se apeló a la informatización, a un programa de retiros voluntarios y a la baja de sucursales de bajo movimiento. Ese año cerró con 16 casas fuera de



El gobierno de Carlos Menem estrechó los lazos con el gobierno de Estados Unidos. Su embajador en la Argentina, Terence Todman (arr. y ab.), pasó a ser una pieza clave en el gobierno de Menem (ab.) y su canciller Di Tella (arr.).



circulación. Al final del año quedaron 16.483 empleados (contra los 18.959 de 1990) y el conjunto de medidas de ahorros llegó a 29,5 millones de dólares.

En el período de crisis, el Banco apuntó a una estrategia combinada. Por un lado, se maximizó la penetración de sus filiales del exterior que, de la mano de las mejoras en las exportaciones primero y de las importaciones después, le permitieron incrementar fuertemente sus operaciones, de un promedio de 600 millones de dólares en 1988 y 1989, a más de mil millones entre 1990 y 1992 (en general, alrededor del 75 por ciento refirieron al comercio con Argentina), con lo cual se convirtió en un vector importante en sus estados financieros. Además, se apoyó en su perfil especializado en actividad agropecuaria, que en ese período tuvo un mejor desempeño relativo que el resto de la economía. Gracias a su capilaridad e inserción territorial, el Banco se mantuvo como un agente clave a la hora de atender necesidades críticas puntuales en diversas provincias y sectores que lo demandaban, como las zonas declaradas bajo desastre o emergencia agropecuaria debido a sequías, erupciones volcánicas e inundaciones, o las estrategias de atención a producciones regionales con requerimientos específicos, y así también el apoyo a la promoción y/o prefinanciación de exportaciones.

El Banco tuvo un efecto positivo en la recuperación de la liquidez y la confianza del sistema financiero, pasando de representar el 10,5 por ciento del total de depósitos en el país, en 1988, al 14,5 por ciento en 1990 y 1991, actuando primero como “búfer” cuando crecían los retiros de los ahorristas, y liderando el crecimiento cuando se recobran fuertemente los activos bancarios. En 1991, el BNA tendría un crecimiento de setenta por ciento interanual de los depósitos en el país y en 1992 volverían a crecer 39 por ciento en términos reales.

Con la baja de la inflación desde mediados de 1991 (en 1992 sería de 17 por ciento, el menor valor en más de veinte años) y luego del fuerte proceso de ajuste, la economía comienza a mostrar indicios de rebote en el consumo y la inversión, y da lugar a una etapa de crecimiento parcial y segmentado, dependiente del devenir del sector externo. En el contexto de paulatina estabilización, el Banco Nación celebró su Centenario.

Pero por otro lado, se llevó adelante un agresivo programa de retiros voluntarios para reducir personal, que disminuyó la plantilla de 19.669 a 14.436 personas entre 1989 y 1992. Incluso la propia privatización del Banco de la Nación Argentina fue incluida en los planes acordados del gobierno con organismos multilaterales, aunque terminó desactivada años después.

Si bien esos primeros años de la convertibilidad permitieron cierto deshago en algunos sectores de la sociedad que disfrutaban en el exterior del “uno a uno” y el llamado “voto cuota”, el escenario político era



más complicado para el gobierno. Una crisis internacional proveniente desde México, el Efecto Tequila, puso sobre el final del gobierno de Menem los riesgos de la globalización y demostraron la fragilidad de la economía argentina. En noviembre de 1994, preparándose para enfrentar el efecto, el Banco de la Nación Argentina concentró sus esfuerzos en aumentar su liquidez. Esto permitió contar con los fondos necesarios para enfrentar los retiros que afectaron al sistema financiero del país en los meses subsiguientes. También habilitó el servicio de Caja de Ahorro en moneda extranjera (dólares) y reactivó la línea de préstamos Programa Global de Crédito Agropecuario, con el BID y el BIRF. Además, lanzó “Crecer Más”, orientado a las economías regionales. También realizó dos pruebas piloto de algo que terminaría imponiéndose en la vida cotidiana: dotó a su personal de tarjetas de débito, instaló dos cajeros automáticos en la sucursal Plaza de Mayo y abonó los haberes por esa vía. Hacia el final del año tuvo 25 mil tarjetas emitidas.

En el plano político, las excentricidades del presidente y las denuncias por corrupción también complicaron su situación. Desde el

El Pacto de Olivos, entre Menem y Alfonsín, permitió la reelección del primero.

Yomagate, los escándalos en el Pami, su secretario privado Miguel Ángel Vicco que le vendió leche en mal estado al propio gobierno, hasta la voladura de Río Tercero y la venta de armas a Ecuador y Croacia, todo salpicó la investidura presidencial. Por otro lado, el principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical (UCR), perdió toda representatividad. Estas dos situaciones se conjugaron para que Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín, negociaran una salida política que le permitiera a Menem la posibilidad de una reelección y devolviera al radicalismo y alfonsinismo a su rol de principal oposición en la Argentina. El acuerdo se conoció como el Pacto de Olivos y llevó a una reforma de la Constitución Nacional, que se puso en vigencia a partir de 1994 y que estableció la posibilidad de reelección del presidente solo por un período, la reducción del mandato a cuatro años, la creación del Consejo de la Magistratura y la instauración del balotaje, entre otras medidas. Esta reforma le permitió a Menem volver a presentarse a elecciones en 1995 y ganó con casi el cincuenta por ciento de los votos, además de obtener la mayoría parlamentaria. ■